



Revista de Estudios Sociales

1 | 1998

Ciencias Sociales - Primera Edición

Comentario al Dossier

Javier Sáenz Obregón



Edición electrónica

URL: <http://journals.openedition.org/revestudsoc/31534>

ISSN: 1900-5180

Editor

Universidad de los Andes

Edición impresa

Fecha de publicación: 1 diciembre 1998

Paginación: 110-112

ISSN: 0123-885X

Referencia electrónica

Javier Sáenz Obregón, « Comentario al Dossier », *Revista de Estudios Sociales* [En línea], 1 | 1998, Publicado el 14 marzo 2019, consultado el 03 mayo 2019. URL : <http://journals.openedition.org/revestudsoc/31534>



Los contenidos de la *Revista de Estudios Sociales* están editados bajo la licencia Creative Commons Attribution 4.0 International.

Comentario al Dossier

Javier Sáenz Obregón
Jefe Unidad de Desarrollo Social Departamento
Nacional de Planeación

El dossier de este primer número de la revista contiene dos tipos de artículos con alcances claramente diferenciados. En primer lugar, están los escritos de Mauricio Rubio y Fernando Cubides cuyo propósito es el de presentar un estado del arte del desarrollo de conocimiento en el país de sus respectivas disciplinas. En el caso de Rubio, sobre el problema específico de la violencia desde una perspectiva económica, y en el de Cubides, sobre el campo de la sociología en general. Los dos autores hacen un análisis juicioso que no se limita a los avances y logros de sus disciplinas, sino que señalan claramente sus límites y posibilidades para aportar a la solución de los principales problemas nacionales.

El segundo tipo de artículos leídos, los de Sergio de Zúbirá, Jorge Morales, Luís Javier Orjuela y Oscar Mejía y Maritza Formisano, tienen un objetivo menos ambicioso. Sus trabajos tematizan y analizan, desde perspectivas teóricas claramente definidas, algunas dimensiones específicas de la práctica social colombiana.

Dada la magnitud de la tarea de comentar el conjunto de artículos en su diversidad disciplinaria, - economía, sociología, ciencia política, filosofía, antropología y derecho - tanto como en la pluralidad de sus objetos de discurso - conflicto, violencia, política pública, legitimidad, actores sociales, democracia, civilización, Estado, modernidad y postmodernidad, eficiencia, ethos cultural, ética, colombianidad y malicia indígena, entre otros - me limitaré a comentarios generales sobre el segundo tipo de artículos y a reflexiones puntuales sobre los artículos de Rubio y Cubides, sin ninguna pretensión de equidad, y con la libertad -imprudencia dirán algunos - de no provenir de ninguna de las disciplinas de los autores.

En general los artículos del segundo tipo, excluyen de la estructura de su argumentación una serie de temas con una importante tradición en las ciencias sociales y de clara pertinencia para el análisis social del país; temas como la educación, la comunicación y las instituciones. Igualmente, tienden a invisibilizar dos dimensiones centrales de los procesos sociales. En primer lugar, la confluencia y acción recíproca, señalada por Norbert Elias, de las configuraciones sociales y las psíquicas que se escenifican de formas diversas en distintas culturas y momentos históricos, proceso en el cual ninguna de estas dimensiones de la vida se construye independientemente de la otra. En segundo lugar, la experiencia histórica de los individuos y las sociedades como elemento que obstaculiza o posibilita procesos de cambio, los cuales implican claramente una reconstrucción de la experiencia. No se trata simplemente de señalar *lo que falta*, siempre faltará algo en los análisis, sino de subrayar que lo que falta es fundamental para un abordaje pragmático del contexto nacional.¹

¹ Las referencias al *pragmatismo* en el texto aluden a la escuela de pensamiento instaurada por Charles Peirce, William James y John Dewey entre otros.

La distancia de los textos citados con¹ una actitud pragmática se evidencia, igualmente, en la ausencia notoria de datos empíricos, y por lo tanto de una descripción y análisis cuidadoso y plausible del contexto nacional. Es como si la formulación teórica, esa sí sutil y rigurosa, reemplazara el contexto existente. Como si los conceptos puestos a jugar sobre un telón blanco, hicieran las veces del difícil proceso - más parecido a un experimento con resultados inciertos que a una proyección cinematográfica - del encuentro de las conceptualizaciones y los hechos empíricos.

Tratándose de escritos no solamente analíticos sino con una intención propositiva, considero pertinente la crítica a su ausencia de pragmatismo. Esta debilidad, además de lo ya mencionado, se corrobora con la sensación de indefinición que dejan los textos, en cuanto a los lectores a los que van dirigidos/Indefinición que parece inclinarse hacia el diálogo endógeno del mundo académico, legítimo a mi juicio para otro tipo de discursos - como por ejemplo en los balances disciplinarios de Cubides y Rubio -pero poco estratégico cuando se trata de analizar problemas sociales, reconocidos como tales públicamente, y sobre todo cuando se proponen alternativas para su solución.

El asunto aquí es el viejo debate sobre la relación entre academia y sociedad, pero más circunscrito: ¿Cómo establecer desde las comunidades académicas una comunicación con sentido, que permita que sus conceptos y discursos sean apropiados inteligente y eficazmente por las instituciones cuyo propósito es el cambio social?

Una respuesta preliminar a este interrogante, es que es necesario imaginarse y colocarse en el lugar de un lector distinto al colega de la cofradía académica. Lector que no es necesario subestimar, pero que por su rol social específico, sí exige un mayor detenimiento en el estudio de contexto así como en el análisis de los medios y su relación con los fines: fines que tanto han seducido a la comunidad de los científicos sociales.

Evitemos posibles equívocos. No se trata de regresar a la concepción - algo ingenua para una sociedad como la nuestra que ha alcanzado cierto nivel de diferenciación - del académico como activista transformador de la práctica social. No estoy proponiendo que los investigadores de las universidades nos reemplacen a nosotros los tecnócratas y burócratas, como tampoco a los líderes y activistas de las organizaciones sociales y de los organismos no gubernamentales. No creo que la función del académico universitario en el país incluya el diseño e implementación de políticas y programas de cambio social. A pesar del débil status social del conocimiento académico en Colombia y de la desconfianza, inclusive en los mismos centros universitarios, hacia la figura del intelectual como creador o recontextualizador de ideas, creo que las ideas son la razón de ser del académico. El desafío no está entonces en inventarse una nueva relación del académico con el conocimiento, sino en exigirle un tipo de comunicación diferenciada cuando apela, ya no a sus colegas, sino al conjunto de las instituciones y actores sociales.

En cuanto a los textos de Rubio y Cubides, quiero resaltar, en el trabajo de Mauricio Rubio, su potencia

como apertura a un diálogo, tardío en nuestro país, entre la economía y las demás ciencias sociales. Diálogo que sólo podía ser abierto por una figura harto escasa, la del economista *civilizado* como lo es Rubio en su escrito; entendiendo aquí la civilización, como la capacidad de los individuos y de los grupos sociales para ser auto-irónicos en relación con sus propias perspectivas; en este caso la de la disciplina económica. El economista contemporáneo, como el teólogo, el filósofo y el médico en épocas pasadas, tiene el poco envidiable rol, asignado por la sociedad contemporánea - muy a pesar suyo en algunos casos pero con enorme e ingenuo placer en la mayoría de ellos - de haber sido elegido para establecer una relación privilegiada con la *verdad*. En este sentido es difícil sobrestimar el mérito de Rubio al señalar los límites de la perspectiva económica para la comprensión de la violencia.

La crítica de Rubio a la noción reciente de los economistas nacionales sobre los *costos de la violencia* es un ejemplo claro de esta envidiable capacidad de auto-ironía, al señalar que "No todo *impacto* o *efecto* es un costo". Se trata de una crítica necesaria a la usual ingenuidad demostrada por los economistas en el establecimiento de relaciones lineales, y cuestionables en la mayoría de los casos, entre causas y efectos. Las complejas mediaciones sociales entre un hecho - el narcotráfico por ejemplo—y sus impactos y efectos sociales, exigen una argumentación más sofisticada que la del sentido común, para lograr convencer, más allá del moralismo metafísico, sobre el porqué un acto ilegal, representa en todas sus dimensiones, un costo social.

Igualmente lúcido es el señalamiento que hace el autor sobre algunas dimensiones en las que se hacen evidentes las limitaciones del enfoque económico para el análisis de la violencia, entre otras, su debilidad en el uso de evidencia distinta de la estadística, y los límites de su noción de *agente racional* como modelo de comportamiento humano. En cuanto a lo primero, es evidente que muchos economistas, al abordar fenómenos sociales complejos, caen en la tentación de lo que podemos denominar *numerolatría*: la idea ingenua, mezcla de empirismo y metafísica, de que "las cifras hablan por sí solas." Es evidente que las estadísticas, como cualquier otra forma de lenguaje abstracto, no hablan de manera directa, en el mejor de los casos logran indicar, y dirigir la inteligencia hacia el sentido de los fenómenos sociales. Fenómenos que por su complejidad temporal, espacial y experiencial, deben ser abordados desde una perspectiva igualmente compleja, combinando no sólo las diversas disciplinas sociales, como lo señala el autor, sino también una fina red de conceptos tejida en función del fenómeno a analizar.

En cuanto a la noción del agente racional como sujeto abstracto y homogenizador de la condición humana, bastante cercano al *Everyman* del teatro moralizador del medioevo, la lucidez del análisis del autor no deja mucho campo para el lucimiento del comentarista, más allá de señalar que contiene una crítica certera y necesaria a las abstracciones colectivizantes y por lo tanto engañosas que han aparecido recurrentemente en los discursos sociales sobre el país, desde la concepción de médicos y pedagogos de principios de siglo acerca de

la sociedad colombiana como *raza degenerada*, pasando por las nociones de los políticos en la época de La Violencia, del colombiano como *violento y amoral*, hasta llegar a los discursos más recientes sobre una supuesta *cultura de la violencia* nacional.

El señalamiento de Rubio de las limitaciones de la economía lo llevan a apelar de manera explícita a un mayor trabajo conjunto con las demás ciencias sociales. Igualmente hace un llamado, poco común no sólo para la economía sino también para las otras ciencias sociales, a profundizar en un conjunto de problemas que, a mi juicio, hacen parte del escenario natural de la psicología, tales como la violencia familiar y la interpersonal, la comprensión del comportamiento individual violento y su componente irracional y emotivo. La debilidad en el análisis de estos temas en el país es un síntoma del precario desarrollo e inserción social de la disciplina psicológica, cuya crisis se ve claramente reflejada en que su contribución al debate público sobre estos asuntos, parece limitarse a la peregrina y poco ilustrativa tesis de que hogares violentos tienden a reproducir comportamientos violentos en los futuros ciudadanos.

El texto de Fernando Cubides es igualmente lúcido, y en relación con el de Rubio, enfatiza más en los logros y posibilidades de la disciplina que en sus limitaciones. Comparte con Rubio algunas de las críticas a la tradición de estudio sobre la violencia en el país, pero a la vez, marca diferencias claras en cuanto al encuadre que deben tener dichos estudios. El análisis y debate sobre dichas continuidades y discontinuidades deberían ser retomadas por la comunidad de los violentólogos.

Es evidente el contraste entre el pesimismo de Rubio y el optimismo de Cubides en cuanto a la relación entre el mundo académico y las políticas públicas. Mientras que el primero señala que los estudios académicos sobre el crimen y la violencia han estado siempre rezagados en relación con las políticas públicas, y por lo tanto estas últimas no se han fundamentado en los diagnósticos de los académicos, el segundo afirma exactamente lo opuesto: que a pesar de las imperfecciones en esta relación, las políticas públicas relacionadas con el tema de la violencia se han basado en los resultados de la investigación académica. Y va más allá, al afirmar sin rodeos: "Este tópico del divorcio entre el saber y el poder, era propio de décadas anteriores, pero hace rato no es vigente".

Sin entrar a terciar en la valoración de esta relación en el tema específico de la violencia, me inclino más por el pesimismo de Rubio, a partir de lo que ocurre en el campo -con límites poco claros- del *desarrollo social*. Al margen de la poca inteligencia que se le podría endilgar a los tomadores de decisiones en cuanto a su capacidad de apropiación de la investigación de los académicos y su uso en la formulación de políticas públicas, en la mayoría de los temas de desarrollo social es muy escasa la investigación de los centros académicos de utilidad para el diseño de políticas. Sigue infranqueable el abismo que separa la sutileza y complejidad teórica y lingüística que predomina en el discurso de los investigadores de las instituciones académicas, y la racionalidad instrumental que domina en los funcionarios que diseñan las políticas.

Pero no se trata de un divorcio fundamental entre la lógica del saber y la del poder. A pesar de la demonización a que ha sido sometido el aparato estatal colombiano en las últimas décadas por parte de los analistas sociales, viendo en él únicamente corrupción, clientelismo, premodernidad e ilegitimidad, en el diseño de las políticas y los programas estatales se ha logrado, así sea incipientemente, cierto grado de racionalidad y de fundamentación en el conocimiento. Lo que pasa es que este conocimiento no ha provenido de las investigaciones autónomas emprendidas por tres universidades y los centros de investigación, sino de los estudios y consultorías contratadas por el Estado. Situación ésta que si bien no indica una incomunicación entre el saber y el poder, tampoco es demasiado favorable para el diálogo inteligente y mutuamente enriquecedor entre las instituciones académicas y las del Estado, dado que las reglas del juego sobre qué es importante conocer y los alcances de estas indagaciones son en buena medida definidos unilateralmente por las instituciones estatales.

Otro elemento que vale la pena resaltar en el trabajo de Cubides es su énfasis en la distinción entre violencia y conflicto. Con algo de licencia poética, creo que esta distinción puede profundizarse aún más, ya que se podría pensar no sólo que son cosas distintas, sino inclusive que son opuestas. Que el comportamiento violento, sea este individual o colectivo, tiene como una de sus causas el no reconocimiento y abordaje del conflicto, mientras que en la resolución cada vez más imaginativa y equilibrada del conflicto estaría la clave del desarrollo individual y social. Si aceptamos que el conflicto - sea este psíquico o social - es el escenario ideal para ampliar la experiencia al posibilitar la inclusión y legitimación de nuevos elementos psíquicos o nuevas racionalidades y actores sociales, se hace evidente su distancia con la violencia, cuya lógica es la de la represión eliminación. Para contextualizar el argumento en el país, como lo planteó hace ya casi una década el maestro Estanislao Zuleta, se puede defender la tesis que la violencia en nuestra cultura es un signo inequívoco de que somos una sociedad todavía inmadura para el conflicto. Esta inmadurez se refleja no sólo en la violencia política o en la criminalidad común, sino en el ethos de nuestras instituciones. En buena parte de ellas con inusitada frecuencia, el conflicto se convierte en violencia simbólica, o se busca evitarlo, al actuar como si lo opuesto a la violencia fuese el unanimismo o la aceptación acrítica de la autoridad.

El trabajo de Luís Javier Orjuela contiene una imprecisión que facilita su esfuerzo argumentativo por establecer una relación a priori entre apertura económica y la creación de condiciones desfavorables para un proceso de democratización e integración de la sociedad. De manera equivocada, Orjuela señala que a partir de la apertura se ha reducido el gasto público de carácter social, mientras que todas las cifras sobre el gasto social - las de tiros y troyanos - señalan que se éste ha tenido un incremento real y sostenido en los últimos siete años. Esta imprecisión, junto con lo genérico de los datos empíricos con los que busca apoyar su tesis, parece indicar que más que la conclusión de un análisis juicioso, se trata de una convicción ideológica que en el escrito no queda suficientemente sustentada.

. De otra parte, Orjuela contrapone la legitimidad y la eficiencia del Estado. Su tesis central es que el énfasis en la eficiencia de las "reformas neoliberales", se contrapusieron al objetivo de fortalecerlo, de la Constitución de 1991. Así como *no* es clara esta contraposición desde una perspectiva puramente racional, la ausencia de referencias a estudios de caso específicos, tampoco la clarifican en el contexto nacional. En este sentido, despachar alegremente el proceso de descentralización por "la exacerbación del clientelismo regional", como si fuera un proceso simple con un sólo efecto, es a todas luces cuestionable. Que no tengamos balances juiciosos del proceso de descentralización es otro reclamo que le podemos hacer a las ciencias sociales. Pero esta ausencia no legitima análisis reductivos.

Finalmente, una de las tesis centrales del trabajo de Jorge Morales, presentada en sus conclusiones, que "La Malicia Indígena rige (en el país) como marcador étnico especialmente en las relaciones con nacionales de otros países (...)", ejemplifica la debilidad del análisis histórico y social de su ensayo. En primer lugar, en el análisis de sus causas. Si el imaginaria y la identidad cultural del colombiano como portador de dicha "malicia indígena", se explica por "la experiencia colonial del indio", -como dice el autor, habría que sustentar porqué fue la experiencia del indígena y no la del negro, el español o el mestizo la que determinó el núcleo de nuestros imaginarios.

En segundo lugar, habría que especificar los elementos de nuestra experiencia histórica que nos permiten diferenciarnos, a partir de esta auto-percepción, de otras naciones. En especial, de otros países latinoamericanos con experiencias coloniales de cierta continuidad con la nuestra y con imaginarios bastante análogos, como se puede constatar en la literatura sobre el "ladino" mexicano, o en la descripción del "chula" ecuatoriano en la obra de Jorge Icaza, o en aquella oda a la "malicia" y "Viveza" del 1 salvadoreño del poeta Roque Roldán.

Más que en las preguntas que se formula el autor sobre nuestra *colombianidad*, considero que una explicación más certera de este "carácter nacional" que va de la mano de una clara indisciplina social, reside en un proceso psíquico y social más universal y propio de grupos sociales en los cuales se ha debilitado una moral tradicional y metafísica - la moral católica, y las formas de convivencia de los indígenas y los afroamericanos, en nuestro caso - y no se ha logrado imponer una ética moderna, propia de las sociedades complejas, reguladas por Estados con altos niveles de legitimidad y democracia.